

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

**SECRETARIA JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE
FACATATIVA (CUNDINAMARCA)**

Marzo 10 de 2022: Al despacho el proceso contra **JEFERSON ESTIVEN TORRES MARTINEZ** identificado con C.C. No. 1.022.342.513, informando que se recibe a través del correo institucional el 24 de febrero de 2022, derecho de petición suscrito por el condenado, por medio del cual solicita que le sea concedida la libertad condicional y solicita se exonere de la multa de dos (2) smlmv en vista que su situación económica es precaria. Sírvasse proveer.

BLANCA CECILIA GUTIERREZ
SECRETARIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA

Marzo diez (10) de dos mil veintidós (2022)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0144

Número único:	252863104001201000312
Condenado:	JEFERSON ESTIVEN TORRES MARTINEZ
Delito:	TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES
Sitio de Reclusión:	PRISIÓN DOMICILIARIA – CONPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA D.C. – LA PICOTA -
Motivo:	SOLICITUD LIBERTAD CONDICIONAL Y SOLICITUD EXONERACIÓN PAGO DE MULTA
Decisión:	NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL - Falta documentos – artículo 480 Ley 600 de 2000. NIEGA EXONERACIÓN DEL PAGO DE LA MULTA

1.- OBJETO DE LA DECISIÓN

Sería el caso pasar a resolver la solicitud invocada por el condenado **JEFERSON ESTIVEN TORRES MARTÍNEZ** identificado con C.C. No. 1.022.342.513, quien se encuentra bajo el sustituto de prisión domiciliaria en la **Vereda Parcelas, Parcela 68 – Globo 1 en Cota Cundinamarca**, vigilado por el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá D.C. – La Picota -, si no fuera porque adolece de un requisito señalado en el artículo 480 del C.P.P. (Ley 600 de 2000).

2.- ASUNTO

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, la misma no se puede llevar a cabo debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura necesaria y, además, la misma Ley concedió un término de un (1) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la USPEC para implementar el sistema. Por lo anterior procede el Juzgado a pronunciarse sobre la petición incoada bajo las normas de la Ley vigente

3.- ANTECEDENTES PROCESALES

Por hechos ocurridos el 3 de septiembre de 2006, el Juzgado Penal del Circuito de Descongestión de Funza Cundinamarca, mediante sentencia del 30 de septiembre de 2014,

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

CONDENÓ a **JEFERSON ESTIVEN TORRES MARTINEZ** a la pena principal de CUARENTA Y OCHO (48) MESES DE PRISIÓN Y MULTA DE DOS (2) SMLMV y a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal, al haber sido hallado autor responsable del delito de **TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES**. El juzgado fallador NEGÓ al sentenciado la suspensión condicional de la ejecución de la pena, pero **CONCEDIO** la prisión domiciliaria, previo pago de caución equivalente a un (1) smlmv y suscripción de diligencia de compromiso y ordenó librar orden de captura en contra del infractor.

Una vez el fallo condenatorio cobró ejecutoria el 25 de septiembre de 2015¹, el Juzgado Penal del Circuito de Funza Cundinamarca libró ORDEN DE CAPTURA Oficio No. 2972 del 6 de septiembre de 2018²

Este Juzgado AVOCÓ conocimiento del proceso el 20 de diciembre de 2018 mediante auto de sustanciación No. 1671 y dispuso reiterar ante las autoridades correspondientes la orden de captura.

Mediante auto de fecha 26 de abril de 2019 legalizó la captura del condenado y libró Boleta de Encarcelación No. 042 ante el señor director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Bogotá COMEB – PICOTA y por auto del 3 de mayo de 2019 dispuso la remisión del expediente al Centro de Servicios Administrativos de los homólogos de Bogotá D.C. – reparto -, por competencia.

JEFERSON ESTIVEN TORRES MARTINEZ descuenta pena dentro del presente asunto desde el **26 de abril de 2019**³

El homólogo 25 de Bogotá D.C., mediante auto de fecha 29 de mayo de 2019 avocó conocimiento del asunto y en vista que el condenado efectuó el pago de la caución mediante póliza judicial No. NB100327660 el 28 de mayo de 2019 y suscribió diligencia de compromiso el 30 de mayo de 2019⁴, se libró Boleta de Traslado 20, el infractor fijó el domicilio en la Vereda Parcelas, Parcela 68 – Globo 1 en Cota Cundinamarca y mediante auto emitido el 6 de junio de 2019, ordenó la remisión del expediente a este Juzgado.

Este despacho mediante auto de sustanciación No. 1500 del 13 de agosto de 2019, dispuso conocer de las diligencias como reingreso, tomándose el mismo número interno asignado mediante el avóquese del 20 de diciembre de 2018 e incorporar al expediente el oficio No. 13690, procedente del Centro de Servicios Administrativos de Bogotá D.C. – homólogo 25, por medio del cual se informó sobre la emisión de la boleta de traslado ante el Director del Complejo Penitenciario La Picota.

En esta oportunidad ingresa al despacho con derecho de petición suscrito por el sentenciado mediante el cual solicita se conceda la LIBERTAD CONDICIONAL y se le exonere del pago de la multa de dos (2) smlmv.

3.1 Sobre EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532,

¹ Constancia ejecutoria folio 113 – C04 (001) – expediente digitalizado.

² Folio 115 – C04 (001) – expediente digitalizado.

³ Acta de derechos del capturado – folio 9 – C01 (001) – expediente digitalizado.

⁴ Folios 5 y 15 – C02 (001) – expediente digitalizado.

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020⁵ del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPPEC WEB sostiene que: *"[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".*

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 - , por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, Y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico traemos a colación de la Ley 65 de 1993 lo siguiente:

"ARTÍCULO 104. ACCESO A LA SALUD. <Artículo modificado por el artículo 65 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> Las personas privadas de la libertad tendrán acceso a todos los servicios del sistema general de salud de conformidad con lo establecido en la ley sin discriminación por su condición jurídica. Se garantizarán la prevención, diagnóstico temprano y tratamiento adecuado de todas las patologías físicas o mentales. Cualquier tratamiento médico, quirúrgico o psiquiátrico que se determine como necesario para el cumplimiento de este fin será aplicado sin necesidad de resolución judicial que lo ordene. En todo caso el tratamiento médico o la intervención quirúrgica deberán realizarse garantizando el respeto a la dignidad humana de las personas privadas de la libertad.

En todos los centros de reclusión se garantizará la existencia de una Unidad de Atención Primaria y de Atención Inicial de Urgencias en Salud Penitenciaria y Carcelaria.

Se garantizará el tratamiento médico a la población en condición de discapacidad que observe el derecho a la rehabilitación requerida, atendiendo un enfoque diferencial de acuerdo a la necesidad específica."

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación*

⁵ ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

temprana, provisional o temporal, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, el Gobierno Nacional emitió el Decreto 546 de 2020, mediante el cual adoptó *“medidas para sustituir la pena de prisión y la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimientos penitenciarios y carcelarios por la prisión domiciliaria y la detención domiciliaria transitorias en el lugar de residencia a personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad frente al COVID-19, y se adoptan otras medidas para combatir el hacinamiento carcelario y prevenir y mitigar el riesgo de propagación, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”*.

Por lo anterior, es diáfano que las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión.

4. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Competencia

En razón a la fecha de los hechos que dieron origen al proceso que se estudia – 3 de septiembre de 2006 - se tiene que la actuación se surtió de conformidad con el Código Penal –*Ley 599 de 2000* - y el Código de Procedimiento Penal –*Ley 600 de 2000*-, luego la competencia funcional de este juzgado está determinada por los numerales 1º y 3º del artículo 79 de la Ley 600 de 2000.

En vista que el señor **JEFERSON ESTIVEN TORRES MARTINEZ** se encuentra purgando pena en prisión domiciliaria en la Vereda Parcelas, Parcela 88 – Globo 1 en cota Cundinamarca, bajo la vigilancia del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá D.C. – La Picota -, es competente este juzgado en conocer, vigilar la pena impuesta así como el de decidir sobre las peticiones radicadas por el interno conforme los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007⁶.

4.2. De la Libertad Condicional

Cabe resaltar que la concesión de este instituto jurídico llamado Subrogado Penal de la Libertad Condicional, es complejo, en la medida que su procedencia depende de una serie de presupuestos que no están a prima facie al alcance de este funcionario judicial; pues en primer lugar, tal como se desprende del artículo 64 del C. P. P., el cual establece:

“ARTÍCULO 64. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> El Juez concederá la libertad condicional al condenado a pena privativa de la libertad ~~mayor de tres (3) años~~, cuando haya cumplido las tres quintas partes de la condena, siempre que de su buena conducta en el establecimiento carcelario pueda el Juez deducir, motivadamente, que no existe necesidad para continuar con la ejecución de la pena.

⁶ 12.2 Circuito Penitenciario y Carcelario de Facatativá cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman los Circuitos Judiciales de Facatativá, Funza, Villeta y **Guaduas** (a este último municipio le crearon circuito penitenciario)⁶.

No podrá negarse el beneficio de la libertad condicional atendiendo a las circunstancias y antecedentes tenidos en cuenta para la dosificación de la pena

El período de prueba será el que falte para el cumplimiento total de la condena.”

4.3 Cumplimiento de las tres quintas (3/5) partes de la condena.

Al verificar el primero de los presupuestos, esto es, que el sentenciado cumpla con el requisito objetivo determinado por la ley a fin de acceder al beneficio deprecado, se tiene que en el caso que nos ocupa, las tres quintas (3/5) partes de la pena principal de 48 meses de prisión impuesta al interno corresponde a **28 meses y 24 días**. Teniendo en cuenta que el solicitante ha estado privado de la libertad desde el **26 de abril de 2019⁷** hasta la presente fecha, se infiere que ha cumplido físicamente **1050 días que equivalen a 35 meses de la pena impuesta**.

El sentenciado NO, cuenta con redenciones de pena reconocidas.

En este orden de ideas, haciendo la sumatoria del tiempo purgado físicamente, se observa que el infractor ha cumplido con un total de **TREINTA Y CINCO (35) MESES de la pena impuesta**.

Para mayor claridad sobre el tópico analizado téngase el siguiente diagrama:

CAPTURA	26 de abril de 2019
TIEMPO FÍSICO:	35 meses
TIEMPO REDIMIDO:	-0-
TOTAL DESCONTADO:	35 meses
PENA PRINCIPAL:	48 meses
3/5 PARTES DE LA PENA	28 meses y 24 días

Como se expresó, el sentenciado **JEFERSON ESTIVEN TORRES MARTINEZ** hasta la fecha acumula un total de **TREINTA Y CINCO (35) MESES** purgados de la pena impuesta, significando ello que **cumple** con el presupuesto objetivo para acceder al beneficio de libertad condicional.

4.4 Adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario en el centro o domicilio de reclusión.

De otra parte, el artículo 480 del C.P.P. (Ley 600 de 2000), establece que el condenado que se hallare en las circunstancias previstas en el código penal, podrá solicitar al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, la libertad condicional **“acompañando la resolución favorable del consejo de disciplina, o en su defecto del director del respectivo establecimiento carcelario, copia de la cartilla biográfica y los demás documentos que prueben los requisitos exigidos en el Código Penal,”** (negrillas fuera de texto).

Luego entonces, visto que el Director del **Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá D.C. – La Picota** -, no ha presentado ninguna propuesta al respecto, esto es, la respectiva Resolución Favorable, requisito éste contemplado en el citado artículo 480 del C.P.P., resulta obligado Improbar la concesión del Beneficio de la Libertad Condicional impetrado por el sentenciado **JEFERSON ESTIVEN TORRES MARTÍNEZ**, por lo que consecuentemente se procederá a ordenar que por secretaria sea requerido ante las Directivas la respectiva Resolución Favorable y demás documentos que señala el mencionado artículo.

⁷ Acta de derechos del capturado – folio 9 – C01 (001) – expediente digitalizado.

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

Una vez se alleguen los requeridos documentos, vuelva el expediente en forma inmediata al Despacho para resolver lo que en derecho corresponda sobre la solicitada Libertad Condicional.

4.5. DE LA SOLICITUD DE EXONERACIÓN DEL PAGO DE LA MULTA INTERPUESTA POR EL CONDENADO.-

La solicitud allegada por el condenado, mediante la cual la cual manifiesta: “(...) *PETICION ESPECIAL. Solicito se me exonere de la MULTA DE DOS (2) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, ya que mi situación económica es precaria y se ha tornado aún más en este difícil momento. La capacidad material del trabajo familiar tan solo alcanza para satisfacer, de forma precaria, las necesidades básicas del núcleo. Bajo la gravedad del juramento, señalo al señor Juez la incapacidad material de pagar la multa (...).*”

4.6. DE LA EXONERACIÓN DEL PAGO DE LA MULTA

La Corte Constitucional en sentencia C-194 de 2005, en la cual se expuso:

*“... atendiendo a la naturaleza sancionatoria de la multa, la jurisprudencia ha entendido que aquella no configura una ‘deuda’ en el mismo sentido en que lo son los créditos civiles. Y es que no existe razón alguna para considerar que, como en ambos casos el medio liberatorio de la obligación es el dinero, la naturaleza jurídica de los créditos sea la misma. Ciertamente, el origen de la multa es el comportamiento delictual del individuo, no su capacidad transaccional, y su finalidad no es el enriquecimiento del erario, sino la represión de la conducta socialmente reprochable. **Más aún, la multa no es una carga pecuniaria de naturaleza resarcitoria que persiga reparar el daño provocado por el delito.** Como consecuencia de su índole sancionatoria, la multa no es apta de modificarse o extinguirse por muchas de las formas en que lo hacen los créditos civiles. En este contexto, la multa no es susceptible de conciliación, no puede compensarse y, mucho menos, puede extinguirse mediante el fenómeno de la confusión. No está en poder del sujeto pasivo la transacción del monto de la misma o la posibilidad de negociar su imposición, así como no podría éste -pese a una eventual aquiescencia del Estado- ceder su crédito a un particular distinto, pues la finalidad de la multa es la de castigar al infractor de la ley.*

“En fin, para la jurisprudencia ha sido claro que el carácter crediticio de la multa no la convierte en una deuda.

“Y tan cierto es que la multa no es una deuda que la Corte Constitucional, al definir el alcance del artículo 28 de la Constitución Política, ha señalado que cuando la Carta prescribe que ‘en ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas’, aquella lo hace en relación con los créditos civiles y no con los que dimanen de la conducta delictiva del individuo, por lo cual es perfectamente posible que la multa se convierta en arresto o, lo que es lo mismo, que el derecho a la libertad personal se vea condicionado por el cumplimiento de la obligación dineraria constitutiva de multa.
(...)”

“En tal sentido, por no violentar el artículo 28 de la Carta, las normas acusadas tampoco son inexequibles.” (Subrayado fuera de texto).

Efectivamente la Corte Suprema de Justicia ha indicado que el pago de las penas de multa no puede convertirse en un obstáculo determinante e insuperable para el reconocimiento del subrogado en cita. Sobre el particular afirmó esa Corporación:

“Ahora bien y en una labor de hermenéutica con respecto al pago de la multa y sin que ello comporte aceptar la procedencia de la acción de tutela en el presente caso es criterio de la Sala abandonando lo señalado por las autoridades accionadas, que

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

no le es viable jurídicamente al Juez de Ejecución negar la libertad condicional por la mera circunstancia del no pago previo de la multa, como no lo es con respecto al pago de los perjuicios, ya que dentro de su labor, -conforme la norma así lo autoriza- debe explorar las distintas alternativas que tornen viable que el penado efectúe su cancelación. (...)

“Para una mejor comprensión y en una interpretación sistemática de las normas relativas a la multa que resulta jurídicamente asequible -bajo el mismo rasero permitido para el pago de los perjuicios- como válidamente lo señalara el Juez de Ejecución de Penas que la libertad condicional se otorgue sin que concurra al momento de su concesión la cancelación de la multa, pero bajo el condicionamiento del pago de la misma en los términos que el juez de ejecución de penas señale...”⁸

Pero el mismo legislador con el fin de que los condenados pudieran gozar de la libertad condicional, modificó dicha postura con la entrada de la Ley 1453 de 2011, disponiendo que la libertad condicional estaría en todo caso supeditada al pago de la multa asegurando su cancelación mediante garantía personal, prendaria, bancaria o mediante acuerdo de pago. Ello significa, que si le resulta al penado imposible el pago de la multa de forma inmediata, se puede hacer o asegurar su pago mediante dichos mecanismos a los que se puede acudir, para asegurar el cumplimiento de la sanción.

Conforme lo señala el artículo 35 del Código Penal, la multa es una sanción de categoría principal que consiste en la imposición de una carga pecuniaria al responsable del delito. En otros términos, es la imposición de una erogación dineraria al responsable del delito, a favor del tesoro público. La H. Corte Constitucional ha dicho que la multa *“constituye, por regla general, una sanción pecuniaria impuesta al particular como consecuencia de una conducta punible o por el incumplimiento de un deber y, como toda sanción, sus elementos esenciales deben estar determinados en una ley previa a la comisión del hecho de que se trate, incluyendo la cuantía y el respectivo reajuste”⁹.*

Por su parte, el numeral 5º del precitado artículo 39, señala que la multa debe pagarse de manera íntegra e inmediata una vez ejecutoriada la sentencia.

Al respecto señaló el Tribunal Superior de Bogotá:

“Sin embargo, una cosa es la facilidad para el pago y otra muy diferente la exoneración legal para su cancelación, pues en parte alguna el legislador ha previsto que el condenado pueda ser exonerado de esta sanción pecuniaria impuesta en una sentencia condenatoria.

La exoneración implica la posibilidad legal de no pagar, y revisada la cascada legal sobre el tema no existe un solo canon que permita tal fenómeno”¹⁰.

La Corte Constitucional en sentencia C-194 de 2005, al realizar un análisis de los artículos 39 y siguientes del Código Penal, puntualizó que cuando el condenado no cuenta con los recursos necesarios para sufragar su pago o si carece de éstos puede amortizarla con trabajo social, cualquiera sea la pena de multa (exclusivamente cuando la multa es pena principal), descartando la exoneración de su pago, contrario a lo sostenido respecto al pago de perjuicios irrogados con el delito, donde claramente se advirtió la viabilidad de disponer su no exigibilidad por vía penal, cuando el condenado esté en imposibilidad económica de satisfacerla.

Así las cosas, cuando la capacidad económica del condenado es mínima o inexistente, el sistema jurídico ofrece una alternativa económica, consistente en la posibilidad de prorrogar el pago mientras el obligado encuentra los medios para cancelarla, o asegurando su cancelación mediante garantía personal, prendaria, bancaria o mediante acuerdo de pago.

⁸ Corte Suprema de Justicia, Sentencia de tutela, radicación 25.941.

⁹ Sentencia C-390 de 2002 M.P. Jaime Araujo Rentería

¹⁰ 110013104038200400436 01 M.P. Sara Cepeda de Nope-29 de marzo de 2009

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

En ese orden de ideas, no resultaría jurídicamente procedente declarar la “exoneración de la pena de multa” porque en ningún momento nuestro ordenamiento jurídico permite a la autoridad judicial exonerar del pago de la multa impuesta en el fallo condenatorio al sentenciado, pues para eso existen otras alternativas de cancelación.

La razón de lo anterior es porque la medida en que esta sanción pecuniaria ha sido impuesta es en **sentencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada** y por tanto **cobrado su nota de firmeza e inmutabilidad sin que sea dable al operador judicial dejarla sin efecto o vigencia a través de la exoneración a que se ha hecho alusión.**

El Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad debe respetar los derechos del condenado y observar los principios de seguridad jurídica. Significa ello, que este juzgado **NO PUEDE MODIFICAR** la modalidad, plazo para el pago de la multa o readecuarla en suma distinta al monto fijado por el fallador o exonerarlo de su cancelación. En esta fase de ejecución de la pena el condenado está obligado a cumplir condiciones establecidas en el fallo sancionatorio.

Y eso es verdad, el juez fallador en el momento de imponer la pena valoró la capacidad de pago para fijar el monto de la pena de multa, momento procesal en que el inculcado debió haberse pronunciado y no en estas instancias en alegar inexistencia de recursos económicos o excusarse del pago fijado. Se le recuerda al condenado que al momento de que se dictó sentencia no planteó dicha inconformidad quedando la sentencia debidamente ejecutoriada. En consecuencia, los argumentos del condenado en esta fase procesal no lo pueden eximir del pago de la multa, como tampoco modificación alguna del plazo estipulado o la forma de cancelación conforme lo señala la ley.

Por tal razón, la exoneración total del pago de la multa al no tener la capacidad económica para sufragar los DOS (2) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES a los que fue sentenciado resulta improcedente, pues, se reitera, existen otras alternativas a las cuales puede acudir el sentenciado **JEFERSON ESTIVEN TORRES MARTINEZ** para cancelar dicha pena.

Alternativas como las propuestas por el artículo 39 del C.P, (L.599/00) en sus numerales 6 y 7, contempla lo siguiente, en su artículo 39:

“ARTICULO 39. LA MULTA. <Artículo modificado por el artículo 46 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> La pena de multa se sujetará a las siguientes reglas:

1. Clases de multa. La multa puede aparecer como acompañante de la pena de prisión, y en tal caso, cada tipo penal consagrará su monto, que nunca será superior a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Igualmente puede aparecer en la modalidad progresiva de unidad multa, caso en el cual el respectivo tipo penal sólo hará mención a ella.

...

6. Amortización a plazos. Al imponer la multa, o posteriormente, podrá el Juez, previa demostración por parte del penado de su incapacidad material para sufragar la pena en un único e inmediato acto, señalar plazos para el pago, o autorizarlo por cuotas dentro de un término no superior a dos (2) años. La multa podrá fraccionarse en cuotas cuyo número no podrá exceder de veinticuatro (24), con períodos de pago no inferiores a un mes.

7. Amortización mediante trabajo. Acreditada la imposibilidad de pago podrá también el Juez autorizar, previa conformidad del penado, la amortización total o parcial de la multa mediante trabajos no remunerados en asunto de inequívoca naturaleza e interés estatal o social.

Una unidad multa equivale a quince (15) días de trabajo.

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

Los trabajos le obligan a prestar su contribución no remunerada en determinadas actividades de utilidad pública o social.

Estos trabajos no podrán imponerse sin el consentimiento del penado y su ejecución se ceñirá a las siguientes condiciones:

1. Su duración diaria no podrá exceder de ocho (8) horas.
 2. Se preservará en su ejecución la dignidad del penado.
 3. **Se podrán prestar a la Administración, a entidades públicas, o asociaciones de interés social. Para facilitar su prestación la Administración podrá establecer convenios con entidades que desarrollen objetivos de claro interés social o comunitario. Se preferirá el trabajo a realizar en establecimientos penitenciarios.**
 4. Su ejecución se desarrollará bajo el control del juez o tribunal sentenciador, o del juez de ejecución de penas en su caso, despachos que para el efecto podrán requerir informes sobre el desempeño del trabajo a la administración o a la entidad o asociación en que se presten los servicios.
 5. Gozará de la protección dispensada a los sentenciados por la legislación penitenciaria en materia de seguridad social.
 6. Su prestación no se podrá supeditar al logro de intereses económicos.
- Las disposiciones de la Ley Penitenciaria se aplicarán supletoriamente en lo no previsto en este Código.*

En los eventos donde se admite la amortización de la multa por los sistemas de plazos o trabajo, el condenado suscribirá acta de compromiso donde se detallen las condiciones impuestas por el Juez” (Resalta fuera de texto)

De otra parte, la ley 1709 de 2014, en su modificación al artículo 4 de la ley 165 de 1993, insertó un párrafo del siguiente tenor:

...

“Párrafo 3°. En los eventos en los cuales la persona condenada carezca de los medios para el pago de la multa, el juez dispondrá que preste un servicio no remunerado en beneficio de la comunidad. Las entidades territoriales informarán a los jueces de ejecución de penas sobre los trabajos que pueden prestar las personas que carezcan de medios para el pago de la multa” (Resalta fuera de texto)

Pese a que la disposición legal anterior contempla la opción de cumplir con el pago de la pena principal de multa mediante la amortización con trabajo social no remunerado, cabe precisar que para efectos de dar aplicación al numeral 7 del artículo 39 del C.P. (L.599/00), debe tenerse en cuenta lo expuesto por la jurisprudencia en análisis de los pormenores de dicha figura jurídica y en qué casos se presenta viable; para ello la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, en fallo de 31 de agosto de 2011, dentro del radicado No 37219, indicó:

“...

69. Cabe aclarar que conforme lo prevé el artículo 39 de la ley 599 de 2000, no es dable a la Corte, con argumentos como el derecho a la igualdad (Art. 13 C.N.) y la precariedad económica de los sentenciados, dejar de imponerles la pena económica dispuesta por la ley por su incursión en el delito de concierto para delinquir, ni tasarla bajo el método progresivo de la unidad de multa, como lo pidieron, porque la ley la establece como acompañante de la pena de prisión (Art. 340 Ley 599 de 2000), fijándole topes mínimo y máximo, de modo que prescindir de ella, superar por exceso o defecto sus barreras, o tasarla apartándose de “los criterios y reglas para la determinación de la punibilidad” que prevé el mismo Estatuto (Arts. 54-62), sería desatender frontalmente el principio de legalidad, ya en cuanto a la pena misma. Ora respecto del procedimiento para su cuantificación.

70. Tampoco es posible, como también lo piden los sentenciados, que conforme lo prevé el artículo 39, numeral 7, de la ley 599 de 2000, se amortice mediante trabajo social la pena económica, en tanto que dicha normatividad establece esa posibilidad sólo respecto de la multa impuesta como pena única principal, disponiendo las equivalencias entre unidades de

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

multa y días de trabajo, sin hacer lo propio respecto de la multa prevista como acompañante de la pena de prisión.

71. Sobre estos particulares tópicos, ajenos al principio de legalidad de la pena de multa y su amortización a plazos, en sentencia C-185 de 2011 se pronunció la Corte Constitucional en el mismo sentido, donde explicó que:

“Existen dos clases de multas que funcionan de manera distinta en los momentos de su graduación y de las prerrogativas para su cancelación:

- Si la multa aparece como única pena principal su graduación se hace de acuerdo a la tabla de unidades de multa que permite al juez que la impone, condenar al pago mínimo un (1) salario mínimo es decir una unidad de multa (que además de poder pagarse a plazos según el grado puede equivaler a varios salarios mínimos) equivale a 15 días de trabajo.*
- Si la multa aparece como acompañante de la pena prisión su graduación sólo permite al juez condenar al pago de un mínimo de salarios contemplado en la misma norma que describe el delito. Y estos mínimos oscilan entre 5 y 20 S.M.L.M.V los más bajos, luego el Juez no puede atender realmente la situación económica del condenado; y pese a que puede pagarse a plazos, la ley no regula la amortización por trabajo y no existen equivalencias determinadas por el legislador para convertir los salarios mínimos en días de trabajo” (destacado fuera de texto)*

Por tanto, al erigirse los parámetros legales y con base en lo decantado en antelación, queda claro, que en el caso particular no es posible dar aplicación al numeral 7 del artículo 39 del C.P, (L.599/00), quedando como única alternativa viable la que presenta el numeral 6 ejusdem.

En consecuencia, y extendido el argumento anterior, se concluye que la exoneración de la pena de multa es jurídicamente imposible en sede de ejecución de penas por tanto éste funcionario **NEGARÁ** de su exoneración al condenado **JEFERSON ESTIVEN TORRES MARTINEZ**.

4.7. Sobre la Notificación al condenado.

Teniendo en cuenta que **JEFERSON ESTIVEN TORRES MARTINEZ** se encuentra purgando pena en prisión domiciliaria en la Vereda Parcelas, Parcela 68 – Globo 1 en Cota Cundinamarca, se ordena por la secretaría de este Despacho **NOTIFICAR** al condenado el contenido del presente auto a través del correo electrónico margarzara@yahoo.es

5. OTRAS CONSIDERACIONES

5.1 DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

“ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS. Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social...”

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 4.460 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejército EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una Secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la libertad condicional.

Por último se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

“... los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»¹¹, a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».

... las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley... (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

“...6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad...”¹²

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados en el artículo 64 de la Ley 599 de 2000, motivo que lo lleva a acceder la petición invocada.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario “desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece

¹¹ Ibídem.

¹² CSJ T 102248

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

*cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional”.*¹³

5.2. De la Situación Actual del Juzgado.

Por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020 y que en la actualidad nos encontramos organizando y ubicando los procesos.

Del mismo modo se tiene que mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 el mismo Consejo aclaró el Acuerdo CSJCUC21-126 del 2 de mayo de 2021 que autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso *“Autorizar el cierre extraordinario y suspensión de términos de los juzgados que se encuentran ubicados en la sede judicial de Facatativá a partir del 3 de mayo y hasta el 7 de mayo de 2021, inclusive, debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y de allí en adelante hemos tenido que ingresar custodiados por la Policía o el Ejército Nacional para poder ubicar y verificar materialmente los procesos para el respectivo pronunciamiento.*

Sumado a ello en el Acuerdo CSJCUA21-32 del 7 de mayo de 2021 autorizó a los jueces y empleados adelantar sus funciones de Administración de justicia, mediante la utilización de herramientas tecnológicas y en condiciones de trabajo desde casa. Y se agrega la situación de orden público que se está presentando en el municipio de Facatativá que ha sido golpeado de forma indiscriminada por algunos ciudadanos que el viernes 28 de mayo y sábado 29 de mayo de 2021, *se presentó en horas de la noche el ingreso violento de personas no autorizadas a la Sede Judicial, que ocasionaron, por segunda vez, daños, hurtos, destrozos y situaciones de vandalismo en general en dicha sede, afectando los despachos judiciales y el centro de servicios judiciales, viéndose afectada la prestación del servicio de Administrar Justicia en la Sede Judicial de Facatativá.*

Como consecuencia atendiendo las directrices trazadas por el Consejo Seccional de la judicatura de Cundinamarca y la Dirección Ejecutiva Seccional de Cundinamarca, Bogotá y Amazonas por razones de orden público presentadas en este municipio se ordenó el cierre extraordinario de la Sede Judicial y suspensión de términos hasta el 18 de junio de 2021 y desde la semana pasada nos encontrábamos en el alistamiento de todos los expedientes para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización los cuales fueron trasladados por la empresa contratada.

Ahora, en Acuerdo No CSJCUC21-47 del 24 de junio de 2021 el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca autorizó la prórroga del cierre extraordinario y la suspensión de términos de los juzgados de la jurisdicción penal ubicados en la sede judicial de Facatativá (Juzgado 1o y 2o Penal del Circuito de Facatativá-Juzgado 1o y 2o Penal Municipal de Facatativá y Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Facatativá), a partir del 26 de junio y hasta el 29 de junio de 2021, inclusive. Además, en horas de la noche del 29 de junio se presentaron nuevos actos de vandalismo e incineración en la sede judicial lo que originó una nueva prórroga hasta el 21 de julio de 2021.

6. DECISIÓN

Por lo expuesto, el **JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA,**

¹³ C.S.J. RAD 97792

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

RESUELVE

PRIMERO. RECONOCER que a la fecha el señor **JEFERSON ESTIVEN TORRES MARTINEZ** identificado con **C.C. No. 1.022.342.513** ha purgado un total de **TREINTA Y CINCO (35) MESES** de la pena impuesta.

SEGUNDO. DENEGAR la concesión del beneficio penal de la Libertad Condicional, impetrado por **JEFERSON ESTIVEN TORRES MARTINEZ** identificado con **C.C. No. 1.022.342.513**, de conformidad con lo esbozado en la parte motiva del presente interlocutorio.

TERCERO. SOLICÍTESE por la secretaría de este Despacho, ante el señor Director y Asesor Jurídico del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá D.C. – La Picota -, la documentación necesaria a fin de poder entrar a resolver la petición de Libertad Condicional impetrada por el condenado **JEFERSON ESTIVEN TORRES MARTINEZ** .

CUARTO. NEGAR la **EXONERACIÓN DEL PAGO DE LA PENA DE MULTA**, al condenado **JEFERSON ESTIVEN TORRES MARTINEZ** identificado con **C.C. No. 1.022.342.513** conforme a lo consignado en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO.- Teniendo en cuenta que **JEFERSON ESTIVEN TORRES MARTINEZ** se encuentra purgando pena en prisión domiciliaria en la Vereda Parcelas, Parcela 68 – Globo 1 en Cota Cundinamarca, se ordena por la secretaría de este Despacho **NOTIFICAR** al condenado el contenido del presente auto a través del correo electrónico margarzara@yahoo.es

SEXTO.- REMITIR copia de esta providencia al Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá D.C. – La Picota -, a fin de que repose en la hoja de vida del sentenciado **JEFERSON ESTIVEN TORRES MARTINEZ** y se tome atenta nota de ello.

Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y de Apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NELSON NOGUERA PINILLOS
JUEZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA
jeprmsfac@cendoj.ramajudicial.gov.co

Facatativá, 10 de marzo de 2022
Oficio No. 0515

Señor
DIRECTOR
ASESOR JURÍDICO
COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO
LA PICOTA
Bogotá D.C.
libertades2.epcpicota@inpec.gov.co
juridica.epcpicota@inpec.gov.co

URGENTE - SOLICITO DOCUMENTACIÓN ART. 480 DE LA LEY
600 DE 2000 – LIBERTAD CONDICIONAL

Número único:	252863104001201000312
Condenado:	JEFERSON ESTIVEN TORRES MARTINEZ
Delito:	TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES
Sitio de Reclusión:	PRISIÓN DOMICILIARIA – COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTÁ D.C. – LA PICOTA -
Motivo:	SOLICITUD LIBERTAD CONDICIONAL Y SOLICITUD EXONERACIÓN PAGO DE MULTA
Decisión:	NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL - Falta documentos – artículo 480 Ley 600 de 2000. NIEGA EXONERACIÓN DEL PAGO DE LA MULTA

Cordial saludo,

Dando cumplimiento a lo ordenado en auto de la fecha comedidamente le solicito remitir los documentos previstos en el artículo 480 de la Ley 600 de 2000, con el fin de resolver la solicitud de libertad condicional incoada por el sentenciado **JEFERSON ESTIVEN TORRES MARTINEZ identificado con C.C. No. 1.022.342.513**, quien se encuentra purgando pena bajo el sustituto de prisión domiciliaria en la **Vereda Parcelas, Parcela 68 – Globo 1 en Cota Cundinamarca**.

Lo anterior, en aras de salvaguardar los derechos constitucionales del penado.

Agradeciendo su eficaz y oportuna gestión,

Cordialmente,


NELSON NOGUERA PINILLOS
JUEZ